

Declaración Conjunta

Cumbre Parlamentaria de Cambio Climático y Transición Justa en América Latina y el Caribe

20 de abril de 2023

Nosotros, las y los parlamentarios de América Latina y el Caribe partícipes del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC), reunidos en Santiago, Chile, con motivo de la Primera Cumbre Parlamentaria de Cambio Climático y Transición Justa en América Latina y el Caribe,

Conscientes del rol protagónico que desempeña el poder legislativo para impulsar la construcción de marcos normativos efectivos para la transición justa a economías sostenibles y bajas en carbono en los países de América Latina y el Caribe,

Recordando el propósito del OPCC de constituir una herramienta de información compartida sobre el estado de situación de la legislación y el tratamiento parlamentario en materia de medio ambiente en América Latina y el Caribe, y por ende contribuyendo a los objetivos del llamado “Acuerdo de Escazú” en términos de transparencia, acceso y diseminación de información y datos legislativos en materia ambiental,

Reafirmamos nuestro compromiso, en el ámbito del OPCC, con informar, actualizar y garantizar el acceso a la información y datos legislativos sobre asuntos ambientales desde nuestros parlamentos,

Reiteramos la necesidad de implementación pronta y completa de los acuerdos políticos en el foro de nuestros parlamentos, incluyendo la necesidad de ratificación inmediata del “Acuerdo de Escazú” por los Estados que aún no lo han hecho, y el cumplimiento integral del “Acuerdo de Escazú” para aquellos Estados que lo tienen vigente, del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

Teniendo en cuenta los riesgos de profundizar las desigualdades entre los países de nuestra región, reafirmamos nuestro compromiso de promover, desde nuestros Parlamentos, iniciativas de integración internacional y de solidaridad en búsqueda de soluciones colectivas, apoyando especialmente a las naciones más afectadas por los impactos catastróficos del cambio climático, con especial mención de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe.

Nos comprometemos con la co-construcción de una agenda concreta a nivel nacional y, especialmente, regional de acciones vinculadas a (i) Conservación de Ecosistemas, (ii) Marco de Financiamiento y Taxonomía Verde y Sostenible; (iii) Presupuestos para la Sostenibilidad; y (iv) Desarrollo Sostenible y Resiliente al Clima e Industrialización Verde Hacia un Nuevo Modelo Económico.

Conservación de Ecosistemas

Convencidos de que los ecosistemas saludables y la biodiversidad son las defensas naturales más fuertes frente al cambio climático y conscientes del rol especial que tienen los ecosistemas de la Amazonía, del Gran Chaco, de los Glaciares Andinos y de los arrecifes de coral, manglares y lechos de pastos marinos del Caribe, en la regulación del clima, en el secuestro de carbono de la atmósfera, protección de costas y en el ciclo hídrico de nuestros territorios, entre otras funciones propias de nuestros sistemas de vida,

Nos comprometemos, haciendo uso de nuestras funciones legislativas, a impulsar iniciativas normativas para la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, buscando el imperativo de ampliar la superficie de áreas naturales protegidas en consonancia con la meta “30x30” del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, impulsando además la creación de corredores ecológicos y otras áreas destinadas a la conservación de especies, brindándoles seguridad jurídica por medio de normativa específica.

Nos comprometemos, además, a promover el monitoreo de políticas públicas estatales y tareas de fiscalización, estableciendo procesos multi-actor que permitan disminuir los riesgos de avasallamiento, los incendios

forestales provocados, la ampliación insostenible de la frontera agrícola y el uso extractivo ilegal en áreas naturales.

Nos comprometemos, aún, a apoyar el desarrollo de sistemas de justicia ambiental robustos que permitan incorporar los delitos ambientales en los sistemas penales, reconociendo como fundamentales para toda la sociedad en el mundo los aspectos sociales y la vida humana existente en los ecosistemas y teniendo en cuenta que el cambio climático afecta de forma desproporcionada a distintos grupos de la población mundial, especialmente con relación a raza, etnia, género, nivel de ingreso y escolaridad.

Nos comprometemos con crear condiciones para la seguridad de los Pueblos Indígenas, Quilombolas, Pueblos Tradicionales, ciudadanos de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe, y otros grupos que resultan desproporcionadamente más afectados por la crisis climática, tanto en sus comunidades como individualmente, promoviendo la conservación apropiada de ecosistemas a fin de combatir el cambio climático y garantizar la transición justa.

Nos comprometemos, desde nuestras capacidades parlamentarias, en el ámbito de la región con la mayor biodiversidad del mundo, a construir soluciones climáticas junto a las comunidades locales, y los Pueblos Originarios y Tradicionales, por medio del fortalecimiento del diálogo basado en la valorización de sus conocimientos y tecnologías ancestrales y del enfrentamiento a las cuestiones de racismo ambiental y las relacionadas con desigualdades sociales, garantizando su protección, así como la protección de sus territorios y tradiciones.

Finalmente, en coordinación con gobiernos locales, toda la sociedad civil y la comunidad científica, nos comprometemos a articular normativas e iniciativas legislativas que generen oportunidades para implementar soluciones basadas en la naturaleza y alternativas económicas sostenibles sin poner en riesgo a los ecosistemas, considerando los saberes y tradiciones y asegurando la protección de las Poblaciones Originarias y locales.

Marco de Financiamiento y Taxonomía Verde y Sostenible

Recalcando que la transición justa a economías sostenibles y bajas en carbono requiere inversiones y gastos dirigidos para poner en marcha esta transformación,

Nos comprometemos a establecer un marco de financiamiento que fomente inversiones no solo dirigidas a la mitigación del cambio climático, sino también resilientes al clima, promotoras de la adaptación y vinculadas a pérdidas y daños, para proveer el apoyo financiero a inversiones en infraestructura pública, instalaciones y comunidades verdes.

Nos comprometemos a establecer una taxonomía verde y sostenible, que defina criterios según los cuales las inversiones pueden ser consideradas verdes y sostenibles, contribuyendo a crear un entorno de confianza y seguridad que garantice la transparencia, el control y el monitoreo de las inversiones, minimizando los riesgos de las prácticas de engaño o *greenwashing* y permitiendo que los tomadores de decisiones identifiquen las inversiones que son ambiental y socialmente sostenibles y que estén en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, climáticos y sociales a largo plazo.

Nos comprometemos, en nuestra condición de personas legisladoras o parlamentarias de América Latina y el Caribe, a trabajar en forma conjunta para identificar y acordar criterios compartidos que permitan armonizar elementos mínimos comunes de taxonomías verdes y sostenibles en nuestra región, entendiendo y reconociendo que las taxonomías verdes y sostenibles también deben presentar distinciones que reflejan las especificidades de los países, especialmente con relación a su contribución a objetivos ambientales y sociales específicos.

Nos comprometemos a defender normativas que permitan establecer un sistema serio, transparente y riguroso de evaluación de criterios de desempeño ambiental y social específicos para determinar si cumplen con los requisitos de la taxonomía de inversiones verdes y sostenibles.

Presupuestos para la Sostenibilidad

Recalcando la importancia del gasto público en la transición justa a economías sostenibles y bajas en carbono y entendiendo que un ambiente sano, incluyendo la conservación y restauración de los ecosistemas naturales, es crítico para nuestra supervivencia,

Nos comprometemos a promover un estándar común y alto para los proyectos y acciones financiados públicamente, que contemple la necesidad de asegurar que todo gasto e inversión públicos sean sostenibles; y a garantizar que la infraestructura y las instalaciones públicas sean resilientes al clima.

Nos comprometemos a apoyar la transversalización de los conceptos de sostenibilidad y resiliencia climática en nuestros presupuestos nacionales, incluyendo el desarrollo de criterios mínimos verdes y resilientes al clima, que todos los proyectos e iniciativas financiados con recursos públicos deben cumplir.

Nos comprometemos a promover normativas que definan niveles máximos aceptables de impacto en los ecosistemas en el desarrollo y operación de la infraestructura y las instalaciones, así como objetivos de eficiencia energética, eficiencia hídrica y gestión de residuos.

Desarrollo Sostenible y Resiliente al Clima, e Industrialización Verde Hacia un Nuevo Modelo Económico

Considerando las oportunidades que brinda al bienestar humano y a la prosperidad, el aumento de los esfuerzos e inversiones para el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos, la regeneración de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales, la economía circular, la reducción de la huella de carbono de los diferentes sectores productivos y de consumo, la mitigación, la adaptación y la resiliencia al cambio climático,

Comprendiendo que la abundancia de recursos naturales en nuestra región, que es única en el planeta, puede traducirse en una ventaja comparativa y en una oportunidad para el desarrollo económico y la salud, la resiliencia y la prosperidad de las personas, comunidades y poblaciones,

Reconociendo la urgente necesidad de superar de una vez por todas la dicotomía entre desarrollo socioeconómico y el cuidado del ambiente,

Afirmamos que la transición hacia una economía baja en carbono y sostenible debe ser el núcleo duro y elemento inseparable de la estrategia de desarrollo de un país, en cuyo centro debe encontrarse el objetivo de garantizar los derechos humanos, la dignidad humana y promover el bienestar de las poblaciones de nuestra región en toda su diversidad.

Nos comprometemos a trabajar activamente desde nuestros parlamentos para fomentar el desarrollo de capacidades productivas e industriales, de eco-turismo y agricultura sostenible en la región, proponiendo y reforzando regímenes de fomento e inversión para la economía verde, la industrialización verde, la electromovilidad y la economía del conocimiento, entre otras áreas estratégicas para el desarrollo sostenible, con el objetivo de retener en nuestros países los empleos, los ingresos y la prosperidad económica que las inversiones bajas en carbono y sostenibles pueden generar, incluyendo la planificación estratégica de largo plazo.

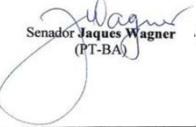
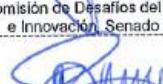
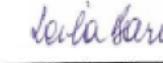
Desde nuestros distintos roles en los parlamentos de América Latina y Caribe, nos comprometemos a impulsar normativas para acelerar la transición energética justa y sostenible y promover los sectores estratégicos, para construir un nuevo modelo económico que dé soporte al ambiente sano, a la vida humana en su diversidad y al desarrollo sostenible.

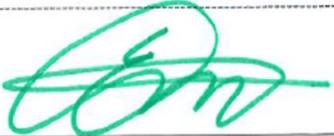
Nos comprometemos, además, a identificar, a partir de un proceso de diálogo entre los parlamentarios partícipes del OPCC y en el marco de los procesos de integración regional existentes como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), mecanismos comunes para la medición, compensación y reducción de los impactos de nuestras actividades

productivas industriales, agrícolas y del turismo, y para la implementación ágil y transparente de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos.

Instamos a los parlamentarios de todo el mundo a unir sus esfuerzos a esta iniciativa, por medio de la cooperación interparlamentaria y la alianza por las metas y desafíos comunes que tenemos como parlamentarios del Sur Global.

Firman esta declaración:

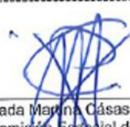
<input checked="" type="checkbox"/>  Senadora Nacional Gladys González Presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable Senado de la Nación Argentina	<input checked="" type="checkbox"/>  Senador Jaques Wagner (PT-BA) Líder del Gobierno en el Senado Federal Senado de Brasil
<input checked="" type="checkbox"/>  Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate Secretaria de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia	<input checked="" type="checkbox"/>  Representante Juan Carlos Lozada Representante a la Cámara del Congreso de la República de Colombia
<input checked="" type="checkbox"/>  Diputada Ximena García Secretaria de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Cámara de Diputados de la Nación Argentina	<input checked="" type="checkbox"/>  Diputado Maximiliano Ferraro Vocal de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Cámara de Diputados de la Nación Argentina
<input checked="" type="checkbox"/>  Dipulada Célia Xakriabá Presidente de la Comisión de la Amazonía y Pueblos Originarios Cámara de Diputados de Brasil	<input checked="" type="checkbox"/>  Senadora Ximena Órdenes Neira Integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senado de Chile
<input checked="" type="checkbox"/>  Diputado Nilto Tarto Miembro de la Comisión de Medio Ambiente Cámara de Diputados de Brasil	<input checked="" type="checkbox"/>  Sr. Gwendell Mercelina, Miembro del Parlamento Curazao
<input checked="" type="checkbox"/>  Diputado Samuel Andrés Pérez Alvarez Diputado del Bloque Legislativo Semilla Congreso de la República de la Guatemala	<input checked="" type="checkbox"/>  Honorable Sra. Verónica Dorsett Hector Secretaría Parlamentaria Montserrat
<input checked="" type="checkbox"/>  Sr. Eliezer Benito Wheatley Enviado Especial del Premier de las Islas Vírgenes Británicas	<input checked="" type="checkbox"/>  Honorable Sr. Melvin "Mitch" Turnbull Ministro de Recursos Naturales y Trabajo Islas Vírgenes Británicas
<input checked="" type="checkbox"/>  Diputado Miro Federico Ruiz Miembro de la Comisión Especial de Ambiente Cámara de Representantes de Uruguay	<input checked="" type="checkbox"/>  Senadora Leila Barros Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente Senado de Brasil
<input checked="" type="checkbox"/>  Diputada Consuelo Veloso Ávila Miembro de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural Cámara de Diputadas y Diputados de Chile	<input checked="" type="checkbox"/>  Senador Juan Ignacio Latorre Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, Senado de Chile
<input checked="" type="checkbox"/>  Diputada Kattia Cambrionero Aquiluz Miembro de la Comisión de Medio Ambiente Asamblea Legislativa de Costa Rica	<input checked="" type="checkbox"/>  Asambleísta Washington Varela Salazar Presidente de la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, Asamblea Nacional de Ecuador



X _____
Senador Emilio Alvarez Icaza
Secretario de las Comisiones de Derechos Humanos y
Zonas Metropolitanas y Movilidad, Senado de la República de México

X _____

Senador Raúl Bolaños-Cachos Cue
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente
Senado de la República de México

X _____

Diputada Marina Cáceras
Miembro de la Comisión Especial de Ambiente
Cámara de Representantes de Uruguay



X _____
Senadora Nancy de la Sierra
Presidente de la Comisión de Organismos Internacionales
Senado de la República de México

X _____

Diputado Gabriel Silva
Miembro de la Comisión Población, Ambiente y Desarrollo
Asamblea Nacional de Panamá

Joint Statement

Parliamentary Summit on Climate Change and Just Transition in Latin America and the Caribbean

20 April 2023

We, parliamentarians of Latin America and the Caribbean participating of the Parliamentary Observatory on Climate Change and Just Transition (OPCC), gathered in Santiago, Chile, on the occasion of the First Parliamentary Summit on Climate Change and Just Transition in Latin America and the Caribbean,

Aware of the leading role played by the legislative power in driving the construction of effective legislative frameworks for the just transition to sustainable and low-carbon economies in the countries of Latin America and the Caribbean,

Recalling the purpose of the OPCC to provide a shared information tool on the state of environmental legislation and parliamentary treatment in Latin America and the Caribbean, and thus contributing to the objectives of the so called "Escazú Agreement" in terms of legislative information and data transparency, access and sharing on environmental matters,

Reaffirm our commitment, within the scope of the OPCC, to inform, update and ensure access to environmental information and legislative data from our parliaments,

Reiterate the need for prompt and full implementation of political agreements within our parliaments, including the need for immediate ratification of the "Escazu Agreement" by States that have not done so yet, and full compliance with the "Escazú Agreement" in the States where it is in force, the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development,

Bearing in mind the risks associated with the deepening of inequalities among the countries of our region, we reaffirm our commitment to promote, from our Parliaments, initiatives of international integration and solidarity in the pursuit of collective solutions, especially supporting the nations most affected by the catastrophic impacts of climate change, with special mention to the Caribbean Small Island Developing States (SIDS);

We commit to the co-construction of a concrete agenda of actions linked to (i) Ecosystem Conservation, (ii) Financing Framework, and Green and Sustainable Taxonomy; (iii) Budgeting for Sustainability; and (iv) Sustainable and Climate Resilient Development and Green Industrialization Toward a New Economic Model.

Ecosystem Conservation

Convinced that healthy ecosystems and biodiversity are the strongest natural protection against climate change and aware of the special role played by the ecosystems of the Amazon, the Gran Chaco, the Andean Glaciers, and the Caribbean coral reefs, mangroves and seagrass beds among other ecosystems, in the regulation of climate, as carbon sinks and in the protection of coasts and the water cycle within our territories, among other functions crucial to our system,

We commit to making use of our legislative functions, to drive initiatives for the protection, conservation and restoration of ecosystems, pursuing the necessary increase the surface area of protected natural areas in line with the "30x30" target of the United Nations Convention on Biological Diversity, promoting the creation of ecological corridors and other areas for the conservation of species, thereby providing them with legal security through specific regulations.

Furthermore, we commit to promoting the monitoring of state public policies and control tasks, establishing multi-actor processes to reduce the risks of land encroachment, the unsustainable expansion of the agricultural sector, and the illegal extractive activities in protected areas.

We commit, moreover, to support the development of robust environmental justice systems that incorporate environmental violations into criminal justice systems, recognizing social aspects and human life that exist within ecosystems as fundamental for all societies in the world, and taking into account that climate change disproportionately affects different groups of the world's population, especially in relation to race, ethnicity, gender, income level, and schooling.

We commit ourselves to create conditions for the security of Indigenous Peoples, Quilombolas, Traditional Peoples, citizens of the Caribbean Small Island Developing States (SIDS), and other groups that are disproportionately more affected by the climate crisis, both in their communities and individually, by promoting appropriate conservation of ecosystems in order to combat climate change and ensure a just transition.

We commit, in our parliamentary capacities within the world's most biodiverse region, to build climate solutions jointly with local communities, Native and Traditional Peoples, by strengthening a dialogue that values their ancestral knowledge and technologies and addressing issues of environmental racism and social inequalities, ensuring their protection, as well as the protection of their territories and traditions.

Finally, in coordination with local governments, civil society, and the scientific community, we commit to develop regulations and legislative initiatives that generate opportunities for implementing nature-based and sustainable economic alternatives without putting ecosystems at risk, considering traditions and ancestral knowledge and ensuring the protection of Native and Traditional Peoples.

Financing Framework, and Green and Sustainable Taxonomy

Emphasizing that the just transition to low-carbon and sustainable economies requires targeted investment and expenditure to set this transformation in motion,

We commit to establish a financing framework that promotes investments that not only mitigate climate change also foster climate resilience, promote adaptation and are linked to loss and damage, by providing financial support to investments in public infrastructure, premises and green communities.

We commit to establish a green and sustainable taxonomy that defines criteria according to which investments can be considered green and sustainable, contributing to creating an environment of trust and security that ensures transparency, control and monitoring, minimizing the risks of greenwashing and allowing decision makers to identify investments that are environmentally and socially sustainable and in line with long-term sustainable development, climate and social objectives.

We commit, as legislators from Latin America and the Caribbean, to work together to identify and agree on shared criteria to harmonize common minimum elements of green and sustainable taxonomies in our region, understanding and recognizing that green and sustainable taxonomies must also present differentiations that reflect the specificities between countries, especially in relation to their contribution to specific environmental and social objectives.

We are committed to advocating for regulations to establish a serious, transparent, and rigorous assessment system for specific environmental and social performance criteria to determine whether they meet the requirements of the taxonomy of green and sustainable investments.

Budgeting for Sustainability

Emphasizing the importance of public spending in the just transition to sustainable, low-carbon economies, and appreciating that a healthy environment, including the including the conservation and restoration of natural ecosystems is crucial for our survival,

We commit to setting a common and high standard for publicly funded projects and actions that addresses the need to ensure that all public spending and investment is sustainable; and that ensures that public infrastructure and facilities are climate resilient.

We commit to promoting the mainstreaming of the concepts of sustainability and climate resilience in our national budgets, including the development of minimum green and climate-resilient criteria that all publicly-funded projects and initiatives must meet.

We commit to promoting regulations that define maximum acceptable levels of ecosystem impact in the development and operation of infrastructure and facilities, as well as targets for energy efficiency, water efficiency, and waste management.

Sustainable and Climate-Resilient Development and Green Industrialization Toward a New Economic Model

Considering the opportunities for human well-being and prosperity that stem from increased efforts and investments for the strengthening of ecosystem services, the regeneration of biodiversity and natural ecosystems, the circular economy, the reduction of the carbon footprint of the different production and consumption sectors, mitigation, adaptation, and resilience to climate change.

Understanding that the abundance of natural resources in our region, which is unique globally, can translate into a comparative advantage and an opportunity for economic development and the health, resilience, and prosperity of people, communities, and populations,

Recognizing the urgent need to overcome once and for all the dichotomy between socio-economic development and care for the environment,

We affirm that the transition to a low-carbon and sustainable economy must be the central focus and inseparable element of a country's development strategy, at the heart of which must be the objective of ensuring human rights, human dignity and promoting the well-being of the people of our region in all their diversity.

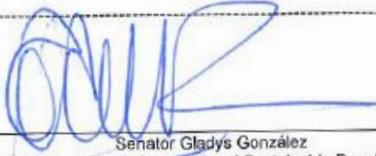
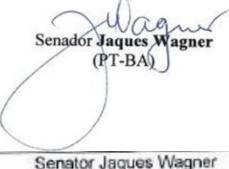
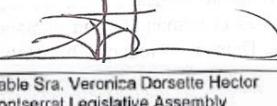
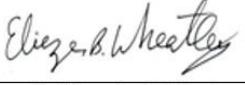
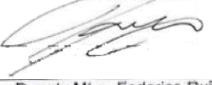
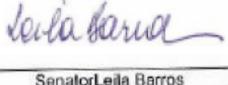
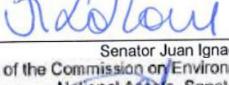
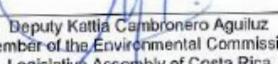
We commit to working actively from our parliaments to foster the development of manufacturing, industrial, eco-tourism, and sustainable agriculture capacities in the region, by advocating for promoting and investment schemes in the green economy, green industrialization, electromobility and knowledge economy, among other strategic sectors for sustainable development, in order to retain in our countries the jobs, income, and economic prosperity that low-carbon and sustainable investments can generate, including long-term strategic planning.

Based on our role in the different parliaments of Latin America and the Caribbean, we commit to promoting regulations to accelerate the just and sustainable energy transition and promote strategic sectors, in order to build a new economic model that supports a healthy environment, human life in its diversity and sustainable development.

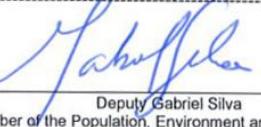
We also commit ourselves to identify, through a process of dialogue between parliamentarians participating in the OPCC and within the framework of existing regional integration processes, such as the Southern Common Market (MERCOSUR), the Andean Community (CAN) and the Caribbean Community (CARICOM), common mechanisms for measuring, compensating, and reducing the impacts of our manufacturing, agriculture, and tourism activities, and for an agile and transparent implementation of payment for ecosystem services mechanisms.

We urge parliamentarians around the world to join our efforts in this initiative, through inter-parliamentary cooperation and alliance for the common goals and challenges we have as parliamentarians of the Global South.

Signatories:

	X Senator Gladys González President of the Environment and Sustainable Development Commission of the Argentine Senate, Argentine Senate		X Senador Jaques Wagner (PT-BA)
	X Senator Cecilia Isabel Requena Zárate Secretary of the Commission on Land and Territory, Natural Resources and the Environment of the Chamber of Senators of the Plurinational State of Bolivia		X Representative Juan Carlos Lozada Member of the Afro-Colombian Legal Commission House of Representatives of the Congress of the Republic of Colombia
	X Deputy Ximena García Secretary of the Commission on Natural Resources and Conservation of the Human Environment, Chamber of Deputies of the Argentine Nation		X Deputy Maximiliano Ferraro Member of the Commission of Natural Resources and Human Environment Conservation Chamber of Deputies of the Argentina Nation
	X Deputy Célia Xakriabá President of the Amazon and Native Peoples Commission Chamber of Deputies of Brazil		X Senator Ximena Ordóñez Neira Member of the Commission on Future Challenges, Science, Technology and Innovation, Senate of Chile
	X Deputy Nilto Taito Member of the Environment Commission Chamber of Deputies of Brazil		X Sr. Gwendolyn Mercelina, Member of the Parliament Curacao
	X Deputy Samuel Andrés Pérez Álvarez Diputado del Bloque Legislativo Semilla Congress of the Republic of Guatemala		X Honorable Sra. Verónica Dorsette Hector Montserrat Legislative Assembly Montserrat
	X Mr. Eleizer Benito Wheatley Special Envoy of the Premier of the British Virgin Islands		X Honorable Sr. Melvin "Mitch" Turnbull Minister of Natural Resources and Labor British Virgin Islands
	X Deputy Mtro. Federico Ruiz Member of the Special Commission on Environment of Representatives, House of Representatives of Uruguay		X Senator Leila Barros President of the Environment Commission Federal Senate of Brazil
	X Deputy Consuelo Veloso Ávila Member of the Committee on Agriculture, Forestry and Rural Development, Chamber of Congress of Chile		X Senator Juan Ignacio Latorre Chairman of the Commission on Environment, Climate Change and National Assets, Senate of Chile
	X Deputy Kattia Cambronero Aguiluz Member of the Environmental Commission Legislative Assembly of Costa Rica		X Assembly Member Washington Varela Salazar President of the Permanent Commission of Biodiversity and Natural Resources, National Assembly of Ecuador

X	
	Senator Emilio Alvarez Icaza Member of the Environment Commission and Metropolitan Areas and Mobility Senate of the Republic of Mexico
X	
	Senator Raúl Bolaños-Cachos Cue President of the Environment Commission Senate of the Republic of Mexico
X	
	Deputy Mariana Casas Member of the Special Commission on Environment House of Representatives of Uruguay

X	
	Senator Nancy de la Sierra President of the International Organizations Commission Senate of the Republic of Mexico
X	
	Deputy Gabriel Silva Member of the Population, Environment and Development Commission, National Assembly of Panama

Declaração Conjunta

Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa na América Latina e no Caribe

20 de abril de 2023

Nós, parlamentares da América Latina e do Caribe participantes do Observatório Parlamentar de Mudança Climática e Transição Justa (OPCC), reunidos em Santiago, Chile, por ocasião da Primeira Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa na América Latina e no Caribe,

Conscientes do papel protagonista do poder legislativo para impulsionar a construção de marcos legislativos efetivos para a transição justa para economias sustentáveis e de baixo carbono nos países da América Latina e do Caribe,

Recordando o propósito do OPCC de constituir uma ferramenta de informação compartilhada sobre o estado da legislação e a tramitação parlamentar em matéria de meio ambiente na América Latina e no Caribe, contribuindo assim para os objetivos do chamado “Acordo de Escazú” em termos de transparência, acesso e divulgação de informações ambientais e dados legislativos,

Reafirmamos nosso compromisso, no âmbito do OPCC, de informar, atualizar e assegurar o acesso às informações ambientais e dados legislativos de nossos parlamentos.

Reiteramos a necessidade de rápida e plena implementação dos acordos políticos no fórum de nossos parlamentos, incluindo a necessidade de ratificação imediata do “Acordo de Escazú” pelos Estados que ainda não o fizeram, e o pleno cumprimento do “Acordo de Escazú” nos Estados em que está em vigor, do Acordo de Paris e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Tendo em consideração os riscos de aprofundar as desigualdades entre os países de nossa região, reafirmamos nosso compromisso de promover, a partir dos Parlamentos, iniciativas de integração internacional e solidariedade na busca de soluções coletivas, especialmente apoiando as nações mais afetadas pelos impactos catastróficos da mudança climática, com menção especial aos Pequenas Ilhas em Desenvolvimento (PEID) do Caribe.

Nos comprometemos com a co-construção de uma agenda concreta em nível nacional e, especialmente, regional de ações ligadas a (i) Conservação de Ecossistemas, (ii) Marco de Financiamento e Taxonomia Verde e Sustentável; (iii) Orçamentos para a Sustentabilidade; e (iv) Desenvolvimento Sustentável e Resiliente ao Clima e Industrialização Verde Rumo a um Novo Modelo Econômico.

Conservação de Ecossistemas

Convencidos de que ecossistemas saudáveis e biodiversidade são as mais fortes defesas naturais contra a mudança climática e conscientes do papel especial desempenhado pelos ecossistemas da Amazônia, do Gran Chaco, dos Glaciares Andinos e dos recifes de coral, mangues e leitos de ervas marinhas do Caribe, entre outros ecossistemas, na regulação climática, no sequestro de carbono na atmosfera, na proteção da costa e no ciclo da água de nossos territórios, entre outras funções inerentes a nossos sistemas de vida,

Nos comprometemos, fazendo uso de nossas funções legislativas, a desenvolver iniciativas para a proteção e conservação dos ecossistemas, buscando o imperativo de expandir a área de superfície de áreas naturais protegidas, em linha com a meta “30x30” da Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas, promovendo também a criação de corredores ecológicos e outras áreas para a conservação das espécies, proporcionando-lhes segurança jurídica por meio de normativas específicas.

Também nos comprometemos a promover o monitoramento de políticas públicas de Estado e tarefas de controle, estabelecendo processos multi-ator para reduzir os riscos de invasão, incêndio, expansão insustentável da fronteira agrícola e uso extrativista ilegal em áreas de conservação.

Comprometemo-nos ainda a apoiar o desenvolvimento de sistemas robustos de justiça ambiental para incorporar os crimes ambientais aos sistemas penais, reconhecendo que os aspectos sociais e a vida humana nos ecossistemas são fundamentais para toda a sociedade mundial e que a mudança climática afeta desproporcionalmente diferentes grupos da população mundial, especialmente em relação à raça, etnia, gênero, renda e educação.

Nos comprometemos a criar condições para a segurança dos Povos Indígenas, Quilombolas, Povos Tradicionais, cidadãos dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento do Caribe (PEID) e outros grupos que são desproporcionalmente mais afetados pela crise climática, tanto em suas comunidades como individualmente, promovendo a conservação apropriada dos ecossistemas para combater a mudança climática e garantir uma transição justa.

Comprometemo-nos, em nossa capacidade parlamentar na região mais biodiversa do mundo, a construir soluções climáticas em conjunto com as comunidades locais, Povos Indígenas e Tradicionais, fortalecendo o diálogo baseado na valorização de seus conhecimentos e tecnologias ancestrais e abordando questões de racismo ambiental e desigualdades sociais relacionadas, garantindo sua proteção, assim como a proteção de seus territórios e tradições.

Finalmente, em coordenação com os governos locais, a sociedade civil e a comunidade científica, estamos comprometidos em articular normativas e iniciativas legislativas que gerem oportunidades para implementar soluções baseadas na natureza e alternativas econômicas sustentáveis sem colocar ecossistemas em risco, assegurando a proteção dos Povos Indígenas e Tradicionais.

Marco de Financiamento e Taxonomia Verde e Sustentável

Enfatizando que a justa transição para economias de baixo carbono e sustentáveis requer investimentos e gastos direcionados para por essa transformação em movimento,

Nos comprometemos a estabelecer uma estrutura de financiamento que promova investimentos não apenas voltados para a mitigação da mudança climática, mas também para investimentos resilientes ao clima, promotores de adaptação e investimentos ligados a perdas e danos, para fornecer apoio financeiro a investimentos em infraestrutura pública, instalações e comunidades verdes e resilientes ao clima.

Nos comprometemos a estabelecer uma taxonomia verde e sustentável que defina critérios segundo os quais os investimentos podem ser considerados verdes e sustentáveis, contribuindo para criar um ambiente de confiança e seguranças que garanta a transparência, o controle e o monitoramento dos investimentos, minimizando os riscos práticas enganosas ou *greenwashing* e permitindo que os tomadores de decisão identifiquem investimentos que sejam ambientalmente e socialmente sustentáveis e em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável, climáticos e sociais de longo prazo.

Nos comprometemos, a partir de nossa condição de legisladores da América Latina e do Caribe, a trabalhar juntos para identificar e acordar critérios compartilhados para harmonizar elementos mínimos comuns de taxonomias verdes e sustentáveis em nossa região, entendendo e reconhecendo que as taxonomias verdes e sustentáveis também devem apresentar distinções que refletem as especificidades entre países, especialmente em relação à sua contribuição para objetivos ambientais e sociais específicos.

Nos comprometemos a defender normativas que permitam estabelecer um sistema sério, transparente e rigoroso de avaliação de critérios específicos de desempenho ambiental e social para determinar se eles atendem aos requisitos da taxonomia de investimentos verdes e sustentáveis.

Orçamentos para a Sustentabilidade

Enfatizando a importância dos gastos públicos na transição justa para economias sustentáveis e de baixo carbono e compreendendo que um ambiente saudável, incluindo a conservação e a restauração dos ecossistemas naturais, é fundamental para nossa sobrevivência,

Nos comprometemos a promover um padrão comum e elevado para projetos e ações financiadas com recursos públicos que contemple a necessidade de assegurar que todos os gastos e investimentos públicos sejam sustentáveis; e que assegure que a infra-estrutura e as instalações públicas sejam resilientes ao clima.

Nos comprometemos a apoiar a transversalização dos conceitos de sustentabilidade e resiliência climática em nossos orçamentos nacionais, incluindo o desenvolvimento de critérios mínimos verdes e resilientes ao clima que todos os projetos e iniciativas públicas devem cumprir para serem financiados com recursos públicos.

Nos comprometemos a promover normativas que definam níveis máximos aceitáveis de impacto nos ecossistemas no desenvolvimento e operação de infra-estrutura e instalações, bem como metas de eficiência energética, eficiência hídrica e gestão de resíduos.

Desenvolvimento Sustentável e Resiliente ao Clima e Industrialização Verde Para um Novo Modelo Econômico

Considerando as oportunidades que brinda ao bem-estar e a prosperidade humana o aumento dos esforços e investimentos para o fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, a regeneração da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a economia circular, a redução da pegada de carbono nos diferentes setores produtivos e de consumo, a mitigação, a adaptação e a resiliência às mudanças climáticas,

Compreendendo que a abundância de recursos naturais em nossa região, que é única no planeta, pode se traduzir em uma vantagem comparativa e uma oportunidade para o desenvolvimento econômico e a saúde, resiliência e prosperidade das pessoas, comunidades e populações,

Reconhecendo a necessidade urgente de superar de uma vez por todas a dicotomia entre o desenvolvimento socioeconômico e o cuidado com o meio ambiente,

Afirmamos que a transição para uma economia de baixo carbono e sustentável deve ser o núcleo duro e elemento inseparável da estratégia de desenvolvimento de um país, em cujo centro deve estar o objetivo de garantir os direitos humanos, a dignidade humana e promover o bem-estar das populações de nossa região em toda a sua diversidade.

Nos comprometemos em trabalhar ativamente em nossos parlamentos para fomentar o desenvolvimento das capacidades produtivas, industriais, do ecoturismo e da agricultura sustentável na região, propondo e reforçando regimes de fomento e investimento para a economia verde, a industrialização verde, a eletromobilidade e a economia do conhecimento, entre outras áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável, a fim de reter em nossos países os empregos, a renda e a prosperidade econômica que investimentos de baixo carbono e sustentáveis podem gerar, incluindo o planejamento estratégico de longo prazo.

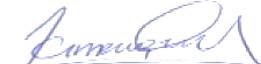
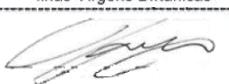
A partir de nossas diferentes funções nos parlamentos da América Latina e Caribe, nos comprometemos a promover normativas para acelerar a transição energética justa e sustentável e promover setores estratégicos, a fim de construir um novo modelo econômico que dê sustentação a um ambiente saudável, à vida humana em sua diversidade e ao desenvolvimento sustentável.

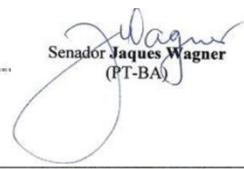
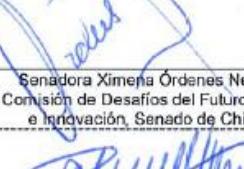
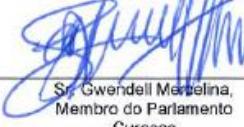
Também nos comprometemos a identificar, a partir de um processo de diálogo entre os parlamentares participantes da OPCC e no âmbito dos processos de integração regional existentes, tais como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a Comunidade das Nações Andinas (CAN) e a Comunidade do Caribe (CARICOM),

mecanismos comuns para medir, compensar e reduzir os impactos de nossas atividades produtivas e para a implementação ágil e transparente de mecanismos de pagamento por serviços ecossistêmicos.

Instamos os parlamentares de todo o mundo a unir esforços a esta iniciativa, por meio da cooperação interparlamentar e da parceria para os objetivos e desafios comuns que temos como parlamentares do Sul Global.

Assinam esta declaração:

X	 Senadora Nacional Gladys González Presidente da Comissão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Senado da Nação Argentina
X	 Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate Secretária da Comissão de Terra e Território, Recursos Naturais e Meio Ambiente do Senado do Estado Plurinacional da Bolívia
X	 Deputada Ximena Garcia Secretaria da Comissão de Recursos Naturais e Conservação do Ambiente Humano, Câmara de Deputados da Nação Argentina
X	 Deputada Célia Xakriabá Presidente de la Comissão da Amazônia e Povos Originários Câmara de Deputados do Brasil
X	 Deputado Nilto Tutto Membro da Comissão de Meio Ambiente Câmara de Deputados do Brasil
X	 Deputado Samuel Andrés Pérez Alvarez Deputado do Bloco Legislativo Semilla Congresso da República de Guatemala
X	 Sr. Eleazer Benito Wheatley Enviado Especial do Premié das Ilhas Virgens Britânicas
X	 Deputado Mtro. Federico Ruiz Membro da Comissão Especial de Ambiente Câmara de Representantes do Uruguai
X	 Deputada Corisuelo Veloso Ávila Membro da Comissão de Agricultura, Silvicultura e Desenvolvimento Rural, Câmara de Deputadas e Deputados do Chile

X	 Senador Jaques Wagner (PT-BA)
X	 Senador Jaques Wagner Líder do Governo no Senado Federal Senado do Brasil
X	 Deputado Maximiliano Ferraro Membro da Comissão de Recursos Naturais e Conservação do Ambiente Humano, Câmara de Deputados da Nação Argentina
X	 Senadora Ximena Ordóñez Neira Integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senado de Chile
X	 Sr. Gwendell Marcelina, Membro do Parlamento Curaçao
X	 Honorable Sra. Veronica Dorsette Hector Secretaria Parlamentaria Montserrat
X	 Honorable Sr. Melvin "Mitch" Turnbull Ministro de Recursos Naturais e Trabalho Ilhas Virgens Britânicas
X	 Senadora Leila Barros Presidenta da Comissão de Meio Ambiente Senado Federal do Brasil
X	 Senador Juan Ignacio Latorre Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Mudança Climática e Bens Nacionais, Senado do Chile

 <input checked="" type="checkbox"/> Deputada Kattia Cambronero Aguiluz Membro da Comissão de Meio Ambiente Assembleia Legislativa da Costa Rica	 <input checked="" type="checkbox"/> Membro da Assembleia Washington Varela Salazar Presidente da Comissão Permanente de Biodiversidade e Recursos Naturais, Assembleia Nacional do Equador
 <input checked="" type="checkbox"/> Senador Emilio Alvarez Icaza Secretario das Comissões de Direitos Humanos e Zonas Metropolitanas e Mobilidade, Senado da República do México	 <input checked="" type="checkbox"/> Senadora Nancy de la Sierra Presidente da Comissão de Organismos Internacionais Senado da República do México
 <input checked="" type="checkbox"/> Senador Raúl Bolaños-Cachos Cue Presidente da Comissão de Meio Ambiente Senado da República do México	 <input checked="" type="checkbox"/> Deputado Gabriel Silva Membro da Comissão de População, Ambiente e Desenvolvimento Assembleia Nacional do Panamá
 <input checked="" type="checkbox"/> Deputada Marlene Cáceres Membro da Comissão Especial de Ambiente Câmara de Representantes do Uruguai	